

A/SER/010100/2018
ACUERDO MARCO QUE FIJA LAS CONDICIONES A QUE HABRÁN DE AJUSTARSE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS, DE “IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, MEDIANTE LA MODALIDAD DE CHEQUE FORMACIÓN, EN LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE COMERCIO Y MARKETING” (19 LOTES).

INFORME JUSTIFICATIVO DEL PROCEDIMIENTO ELEGIDO Y DE LA UTILIZACIÓN DE VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

De conformidad con lo establecido en los artículos 116, 131, 145, 146 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sobre la justificación de la elección de procedimiento y de los criterios a tener en consideración para la adjudicación del contrato y al procedimiento para la celebración de acuerdos marco, se informa de que, en relación con el acuerdo marco denominado: IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, MEDIANTE LA MODALIDAD DE CHEQUE FORMACIÓN, EN LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE COMERCIO Y MARKETING (19 LOTES), se ha utilizado el procedimiento abierto, para que se pueda presentar al mismo todo empresario interesado en la licitación, facilitando la máxima concurrencia que permita, además la celebración con una pluralidad de empresarios.

Igualmente, se utilizan varios criterios de adjudicación, sobre la base de la mejor relación calidad-precio. De ellos, dos son económicos, otros cualitativos y, asimismo, se incluyen mejoras directamente relacionadas con la calidad de la formación a impartir, objeto de los contratos derivados.

La utilización de varios criterios se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 145.3 apartado g) de la LCSP, que establece que procederá valorar más de un criterio de adjudicación en el supuesto de “Contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación...”. Asimismo, dicho precepto prevé que *“En los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual... el precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación”*.

En este caso, hay aspectos que los licitadores pueden aportar respecto a las condiciones mínimas de la prestación exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que inciden directamente en la mejora de la calidad de la formación y favorecen la consecución del objetivo final, que no es otro que facilitar la inserción laboral de los demandantes de empleo que reciben la formación, por lo que es oportuno valorar otros criterios de adjudicación además del precio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 145.4, segundo párrafo y, dado que el objeto del acuerdo marco se encuentra entre los servicios contemplados en el Anexo IV de la LCSP, los criterios relacionados con la calidad suponen más de un 51% de la totalidad de la puntuación. Asimismo, se establece como condición para resultar adjudicatario del acuerdo marco obtener al menos una valoración de 55 puntos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 221.4.a) de la LCSP y, al estar establecidos todos los términos en el propio acuerdo marco, lo que permite adjudicar los contratos derivados del mismo aplicando aquéllos y sin necesidad de convocar a las partes a una nueva licitación, se han determinado los siguientes criterios:



La Administración adjudicará los contratos derivados teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Acuerdo Marco y, en su caso, atendiendo a la preferencia manifestada por el alumno, en base a criterios de ubicación del centro, fechas de impartición de la acción formativa, valoración del centro por parte de otros alumnos, etc., que más se adecúen a sus intereses y siempre que no exista impedimento alguno. La Administración dejará constancia de la selección de la entidad adjudicataria, mediante informe en el que se motive dicha selección, en el expediente de tramitación del contrato derivado.

Este modalidad está directamente relacionado con las características vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que responden a necesidades, definidas en las especificaciones, tanto de la normativa vigente en materia de formación profesional para el empleo como del propio acuerdo marco, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenecen los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, en este caso, las personas trabajadoras en situación de desempleo.

En efecto, la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, establece en su artículo 3, que, entre los principios que rigen el sistema de formación profesional para el empleo, se encuentra el del ejercicio del derecho individual a la formación y la garantía de igualdad en el acceso de los trabajadores, las empresas y los autónomos a una formación vinculada a las necesidades del mercado de trabajo, así como la calidad, eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión.

Asimismo, el R.D. 694/2017, de 3 de Julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, en su artículo 24.1, la referida norma establece que las Administraciones Públicas competentes programarán, con informe preceptivo y no vinculante de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, una oferta formativa para trabajadores desempleados ajustada tanto a las necesidades formativas individuales, conforme al perfil de cada trabajador, como a las necesidades del sistema productivo, con el objeto de que adquieran las competencias requeridas por el mercado de trabajo y mejoren su empleabilidad.

Igualmente, el artículo 25 del R.D. 694/2017, de 3 de Julio, prevé que los trabajadores desempleados que participen en las acciones formativas reguladas en este capítulo, incluidas las prácticas no laborales, podrán percibir ayudas en concepto de transporte, manutención y alojamiento, así como ayudas que permitan conciliar su asistencia a la formación con el cuidado de hijos menores de 12 años o de familiares dependientes, dadas las especiales características y dificultades de carácter económico de este colectivo.

Por último, el artículo 26.2, en su apartado e), al definir las características de la modalidad de cheque formación, establece que el trabajador desempleado elegirá, entre las entidades de formación seleccionadas por la Administración Pública competente, aquélla en la que desee realizar la correspondiente acción formativa.

Por todo lo anterior, las especiales necesidades de los beneficiarios de las prestaciones cuyas condiciones fija este acuerdo marco, la exigencia de gestionar el gasto público conforme a criterios de eficiencia y contención, facilitando la proximidad al domicilio y el ajuste a la situación socioeconómica y al perfil individualizado de inserción de cada usuario, rentabilizando el importe necesario para otorgar las ayudas que posibiliten la conciliación de la asistencia a las acciones formativas, así como las propias especificaciones normativas de esta modalidad de financiación de la formación profesional para el empleo, determinan que el mejor criterio de selección del adjudicatario de cada contrato derivado sean los criterios establecidos en el propio acuerdo marco, atendiendo a la preferencia manifestada por el alumno, poniendo a su disposición para ello, información relativa a la ubicación de los centros de formación, los resultados de la evaluación de calidad de las anteriores acciones de la misma especialidad impartidas por cada



entidad y el número de alumnos matriculados en cada curso, de modo que dicha decisión venga determinada, además, por datos objetivos de calidad y eficacia en la contratación de las plazas.

En segundo lugar y, con el objeto de prever la posibilidad de que no se pueda tener en cuenta la preferencia manifestada por el alumno, la adjudicación de los contratos derivados se efectuará en función de la puntuación obtenida por la aplicación de los criterios de adjudicación del acuerdo marco, de modo que, también, se garantice en este supuesto la adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa.

LA DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN

